



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.

Dirección General de Carreteras
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/17, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DEL “TERCER CARRIL EN LA CARRETERA M-607. TRAMO: TRES CANTOS NORTE – VARIANTE SUR DE COLMENAR VIEJO (M-618)”. A/SER-001517/2020

Se emite este informe a los efectos de la justificación exigida en el artículo 116.4 de la Ley 9/17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que:

“4. En el expediente se justificará adecuadamente:

- a) La elección del procedimiento de licitación.*
- b) La clasificación que se exija a los participantes.*
- c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.*
- d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.*
- e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.*
- f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.*
- g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.*

1. Elección del procedimiento de licitación (artículo 116.4.a) LCSP)

Dado que se trata de un contrato de servicios de los previstos en el artículo 17 de la LCSP, cuyo valor estimado (calculado de acuerdo al artículo 101 de la LCSP) es superior a 209.000 euros, se utiliza el procedimiento abierto. (Art. 159 LCSP).

Este procedimiento garantiza que la contratación de los servicios se ajuste a los principios de libertad de acceso a la licitación, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato a los licitadores. También, al ser su valor estimado de 973.775,29 € se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.

Asimismo, es de aplicación la Disposición Adicional Cuadragésima Primera de la LCSP, que reconoce la naturaleza de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería y urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en la Ley.

2. Clasificación que se exige a los participantes (artículo 116.4.b) LCSP)

Dado que se trata de un contrato de servicios, la clasificación no es un requisito exigible de conformidad con el artículo 77.1.b) LCSP y, por tanto, no se puede requerir con carácter obligatorio para contratos para los cuales no esté prevista su exigencia. Además, el objeto de este contrato no está incluido en el Anexo II del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

3. Criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera (artículo 116.4.c) LCSP)

El apartado 1 del artículo 65 de la LCSP dispone que solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Por su parte, el artículo 86 de la LCSP establece que la solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se acreditará mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de contratación de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de dicha Ley.

Por lo que respecta a la solvencia económica y financiera se requiere el cumplimiento de lo establecido en el artículo 87.1.a) y el criterio para su acreditación será, conforme al artículo 87.3.a), el volumen anual de negocios, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, que deberá ser al menos a una vez y media el valor anual medio estimado del contrato, por tener una duración superior a un año.

El criterio elegido es muy similar al establecido en el artículo 87.3.a) de la Ley 9/2017, para los supuestos en que los pliegos no concreten los criterios o requisitos mínimos. En el presente contrato no concurren riesgos especiales vinculados a la naturaleza de los servicios que aconsejen exigir un importe superior al equivalente a una vez y media el valor anual medio del contrato.

Respecto de la solvencia técnica, en concreto de la basada en el art. 90.1 a) y 90.2.a), se considera que el incrementar el número de años hasta cinco está plenamente justificado en el presente caso, para garantizar un nivel adecuado de competencia, dado que, en los últimos tres años, en términos generales, el volumen de contratación de las administraciones públicas no ha sido muy elevado. Dado que el precepto citado establece que debe seleccionarse el importe anual acumulado del año de mayor ejecución, se ha estimado conveniente ampliar en dos años más el periodo de tiempo respecto al cual debe seleccionarse el mejor ejercicio.

La solvencia técnica exigida es proporcional al objeto e importe del contrato. La acreditación de la solvencia mediante la relación de los trabajos realizados en los últimos cinco años, al tener en cuenta las circunstancias de la economía y del mercado, que han provocado una disminución de la actividad de los empresarios y profesionales, garantiza de manera más efectiva los principios de igualdad entre los licitadores.

En este sentido, se considera que 5 años es una referencia temporal suficientemente reciente cuando se valoran trabajos de este tipo, y que la medida en que se ha ampliado el plazo previsto por la ley resulta proporcional y adecuada para favorecer la participación en la presente licitación.

La posibilidad de exigir los servicios realizados en los últimos cinco años (en lugar de en los tres años que constituye la regla general) viene expresamente contemplado en el artículo 90.1.a) que permite dicha exigencia reforzada “cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia”.

El artículo 90.2 de la Ley 9/2017, para los supuestos en que los pliegos no concreten los criterios o requisitos mínimos la acreditación de la solvencia técnica o profesional se efectuará mediante la relación de los principales servicios efectuados en los tres últimos años, de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

Los trabajos deberán ser de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del presente contrato. Se considerará que un trabajo es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato cuando dicho trabajo se corresponda con el código CPV 71520000-9.

En el presente expediente, los criterios escogidos para que los licitadores justifiquen su solvencia figuran en la documentación que se pone a disposición de los licitadores, son criterios determinados; están relacionados con el objeto y el importe del contrato; se encuentran entre los enumerados en la LCSP según el contrato de que se trata; no son irrazonables o inadecuados para acreditar la solvencia y, en ningún caso, pueden producir efectos de carácter discriminatorio, sin que sea discriminatorio el solo hecho de que no todos los empresarios puedan acreditar la solvencia exigida en el PCAP.

Justificación de la exigencia de la adscripción de medios

Dada la complejidad técnica de los servicios objeto del contrato, se exigen determinados medios personales y materiales que son necesarios para su ejecución en base al art. 76.2 LCSP.

En cuanto a los medios personales se tiene especial atención a los aspectos referidos a la cualificación y experiencia del personal pues la calidad de dicho personal afecta de manera significativa a su mejor ejecución.

4. Criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato (artículo 116.4.c) LCSP)

En base a los artículos 131.2 y 145.1 de la LCSP, la adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio.

El artículo 145.3.g) dispone que la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso en los contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

La determinación de varios criterios de adjudicación, se justifican en el hecho de permitir a todo empresario capacitado la presentación de proposiciones y adjudicar el contrato al licitador que, en su conjunto, efectúe la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al precio más bajo.

El artículo 145.4 de la LCSP indica que en contratos de servicios que tienen por objeto prestaciones de carácter intelectual, (arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo según la Disposición adicional cuadragésimo primera LCSP), como el que nos ocupa, los criterios relacionados con la calidad deberán representar al menos el 51%.

La pluralidad de criterios se ha realizado en base a la mejor relación calidad-precio conforme al artículo 145.4 de la Ley 9/2017LCSP, representando el criterio económico el 49% del total y los criterios cualitativos evaluables de forma automática el 51% del total, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuadragésima Primera de la LCSP referida a las "Normas específicas de contratación pública de servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo", donde a las prestaciones del presente contrato de servicios se les reconoce su naturaleza de prestaciones de "carácter intelectual".

Dichos criterios se han formulado de manera objetiva y están vinculados al objeto del contrato ya que se refieren a las prestaciones que deben realizarse en virtud de dicho contrato, con especial referencia a aspectos referidos a la organización, cualificación y experiencia del personal adscrito al contrato pues la calidad de dicho personal afecta de manera significativa a su mejor ejecución.

Los criterios a valorar para determinar la proposición que resulta económicamente más ventajosa para la Administración, se indican en la propuesta de contratación y se trasladarán el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Fórmula de valoración

La fórmula para puntuar la oferta económica utilizada tiene en consideración la Resolución 51/2019, de 6 de febrero del TACP de la Comunidad de Madrid que establece que para la determinación de la fórmula se han de respetar tres principios fundamentales: la mayor baja será la que obtenga la totalidad de los puntos del criterio, no se tendrán en cuenta relaciones matemáticas que recaigan sobre la baja media de las ofertas, la oferta igual al tipo no obtendrá puntuación y no se incluirán umbrales.

Puntuación Cualitativa: se obtendrá multiplicando por 0,51 la suma de la puntuación obtenida por cada licitador en los diferentes apartados de los criterios cualitativos evaluables automáticamente por aplicación de fórmulas.

Puntuación económica: se calculará para cada oferta por interpolación lineal entre 0 puntos para una oferta igual a Presupuesto Base de licitación y 49 puntos para la oferta más baja, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$49 \times \frac{\text{Presupuesto de licitación} - \text{Oferta económica de la empresa}}{\text{Presupuesto de licitación} - \text{Oferta económica más baja}}$$

Se asignará la puntuación máxima a la oferta económica de menor importe.

Se asignarán 0 puntos a las ofertas iguales al Presupuesto Base de licitación.

La puntuación total del licitador será la suma de la puntuación obtenida por los criterios cualitativos evaluables automáticamente y la puntuación económica obtenida.

La fórmula indicada para la valoración de los criterios cualitativos se ha elegido porque permite una clasificación objetiva de los ofertantes conforme al nivel de experiencia de los profesionales más importantes para el desarrollo del contrato, lo cual redundará en una mayor calidad en la ejecución del mismo.

Y, por otra parte, la fórmula para la valoración de los criterios económicos (precio más ventajoso) se ha elegido porque permite una clasificación objetiva de las distintas ofertas en función de los importes de las mismas.

5. Condiciones especiales de ejecución (artículo 116.4.c) LCSP)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se establece como condición especial en relación con la ejecución del contrato que los licitadores deberán presentar el compromiso de emplear para la ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a personas en situación legal de desempleo, según lo establecido en el artículo 267 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

6. El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen (artículo 116.4.d) LCSP)

El valor estimado del contrato se ha determinado según el artículo 101 de la LCSP. En este contrato no están previstas prórrogas ni modificaciones, por lo que no se prevé importe para estos conceptos y el valor estimado del contrato coincide con el presupuesto base de licitación sin IVA.

7. Justificación de la necesidad a la que se pretende dar satisfacción y su relación con el objeto del contrato (artículo 116.4.e) LCSP)

De conformidad con lo que establecen los artículos 28 y 116.1 de la LCSP por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exponen a continuación la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato y la idoneidad del objeto y contenido del contrato para satisfacerlas:

Naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato (artículos 28 y 116.4.e) de la LCSP)

El presente contrato de servicios se justifica por la necesidad de contar con una adecuada coordinación de seguridad y salud para las obras del "tercer carril en la carretera M-607. Tramo: Tres Cantos norte - variante sur de Colmenar Viejo (M-618)" y con una asistencia para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra de dicho contrato, desde la formalización del contrato principal de obras, incluyendo la inspección, seguimiento, control de mediciones, la calidad y vigilancia de la obra, y toda la gestión documental necesaria para cumplir con las exigencias implantadas para la justificación del cumplimiento contractual de la obra. Este contrato se debe considerar complementario del contrato principal de obras.

Conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado el "Facultativo de la Administración Director de la obra" es la persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos y que integrarán la "Dirección de la obra".

Según los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de las obras de la Comunidad de Madrid:

- Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

- El órgano de contratación, a través de la dirección de las obras efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada. Será misión exclusiva del director la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas. En sus ausencias estará representado, a todos los efectos por el técnico auxiliar.
- El contratista tendrá las consideraciones debidas al personal de la dirección de las obras que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.
- La dirección de las obras tendrá acceso igualmente al Libro de Subcontratación, conforme a lo dispuesto en la Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción (LRSSC).
- Cuando el contratista incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución del contrato.
- El director de la obra podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación.

En caso contrario, la dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos:

- La Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.
- Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista, con derecho de éste a reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación escrita de la Dirección.
- En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al contratista, si resulta comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos, caso contrario correrán a cargo de la Administración.
- Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados a no ser que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

- El director de la obra podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que se determine otra cosa.
- La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.

Según el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nº 256 25-10-1997), el Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente, integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para coordinar la aplicación de los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las obras de construcción, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Idoneidad del objeto y contenido del contrato para satisfacerlas

Dado que el presente contrato es necesario para contar con una adecuada coordinación de seguridad y salud para las obras del “tercer carril en la carretera M-607. Tramo: Tres Cantos norte - variante sur de Colmenar Viejo (M-618)” y con una asistencia para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones de Dirección de Obra de dicho contrato, y el contenido del mismo comprende ambos aspectos, según se ha detallado, el objeto del contrato tiene una relación directa, clara y proporcional con la necesidad a la que se pretende dar satisfacción.

8. Informe de insuficiencia de medios en contratos de servicios (artículo 116.4.f) LCSP)

La Dirección General de Carreteras no cuenta actualmente con medios suficientes para realizar la coordinación de seguridad y salud y la dirección, vigilancia e inspección de las obras del “tercer carril en la carretera M-607. Tramo: Tres Cantos norte - variante sur de Colmenar Viejo (M-618)”.

En concreto, el área de Proyectos y Construcción, a quien corresponde la Dirección del contrato, solo cuenta en su equipo con un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y una Ingeniera Técnica de Obras Públicas para atender todos los expedientes de obras.

En cuanto a la plantilla de vigilantes de obra, no hay en la actualidad ningún profesional operativo para estas tareas, porque están asignados a la Subdirección de Conservación y Explotación, en actividades relacionadas con la vialidad invernal y con actuaciones de conservación extraordinaria.

Por otro lado, existen nuevas exigencias implantadas para cumplir con la justificación contractual de la obra que hacen necesarios nuevos medios de inspección, seguimiento, control de mediciones y de calidad. Además, se incluyen en este contrato de asistencia a la dirección de obra las labores de coordinación en materia de seguridad y salud, las cuales ya se venían contratando mediante contratos de servicios, cuestión totalmente consolidada en esta Dirección General.

Además, durante la ejecución de la obra es necesario contar con un departamento dedicado a la realización de estudios técnicos que preste apoyo a la dirección de las obras.

Por todo ello, no resulta posible acometer los trabajos objetos de este contrato con empleados públicos adscritos al área de Proyectos y Construcción, resultando imprescindible acudir a la contratación externa mediante un contrato de servicios.

9. Justificación de la no división en lotes (artículo 116.4.g) LCSP)

El objeto del presente contrato, consistente en la coordinación de seguridad y salud, y de consultoría y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras del “tercer carril en la carretera M-607. Tramo: Tres Cantos norte - variante sur de Colmenar Viejo (M-618)”, que conlleva una serie de actividades diferentes y prestaciones tales como: inspección, seguimiento, control topográfico, de calidad y vigilancia de la obra, así como, la coordinación en materia de seguridad y salud, que se necesita coordinar para su correcta ejecución. La coordinación de la seguridad y salud forma parte integrante de los trabajos de dirección de obra, y es necesario que la misma empresa que lleva a cabo la vigilancia y asistencia técnica a la dirección de obra lleve a cabo la coordinación de la seguridad y salud, pues en el caso de que se llevase a cabo por otra empresa habría el riesgo de producirse una descoordinación de los trabajos a realizar.

Por tanto, en este caso carece de sentido su división en lotes, dado que para asegurar la correcta prestación de los servicios debe ser prestado de manera integral por el mismo equipo. Son razones de índole técnica las que justifican la no división del contrato en lotes, por cuanto que, si la contratación se hiciera por lotes, se rompería la unidad y dificultaría la adecuada coordinación comprometiendo la correcta ejecución del contrato. Por todo ello, la división en lotes y su ejecución por una pluralidad de contratistas supondría un riesgo para la correcta ejecución del contrato (artículo 99 de la LCSP) desde el punto de vista técnico.

EL JEFE DEL ÁREA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

F mado d g almen e po JOSE MANUEL FERNANDEZ LOPEZ
O gan zac ón COMUNIDAD DE MADRID
Fecha 2020 04 18 10 33 55 CEST
Huella d g 254990135a584d936d3ae7d88853d7a17201368c

EL SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

F mado d g almen e po ANTONIO DOMINGO AYUSO
O gan zac ón COMUNIDAD DE MADRID
Fecha 2020 04 18 10 56 51 CEST
Huella d g 254990135a584d936d3ae7d88853d7a17201368c

EL DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS

F mado d g almen e po FRANCISCO JAVIER ABAJO DAVILA
O gan zac ón COMUNIDAD DE MADRID
Fecha 2020 04 18 11 17 58 CEST
Huella d g 254990135a584d936d3ae7d88853d7a17201368c